



Fernando Forero / CICR

Proteger la dignidad en medio del conflicto

El relato de las personas que han sufrido el conflicto y la violencia armada refleja la difícil realidad que se vive en Colombia.

En 2019, hubo casi una víctima al día de artefactos explosivos y minas, nuevos casos de desplazamiento y de confinamiento de comunidades, homicidios, amenazas, desapariciones, agresiones contra la Misión Médica en las zonas de menor cobertura sanitaria, destrucción de recursos naturales, violencia sexual, y reclutamiento y uso de menores por parte de actores armados. Estas son las violaciones más graves que documentaron los equipos del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Nuestra presencia en los territorios para promover la aplicación del derecho internacional humanitario nos permite afirmar que todavía existen al menos cinco conflictos armados en Colombia. La protección de la integridad física y de la dignidad humana significa que todos los actores armados deben ser inequívocamente responsables de sus actos y omisiones.

Aun así, el miedo de las víctimas al momento de hablar nos indica que el panorama actual es todavía más complejo. Insistimos en la necesidad de acciones de mayor contundencia por parte de las instituciones gubernamentales y de la sociedad civil para responder a las necesidades de la población tras los abusos a los cuales es sometida.

Además de este escenario de violaciones a las normas humanitarias, se observa una población migrante en condiciones de suma vulnerabilidad, pero con capacidad para superar las dificultades. Gran parte de los colombianos y el Gobierno han acogido a estas personas con las puertas abiertas, pero la respuesta de la comunidad internacional ha sido insuficiente.

Las autoridades nacionales y las organizaciones sociales, incluido el Movimiento Internacional de la Cruz Roja, seguirán enfrentando desafíos si los recursos no son acordes a las necesidades de las poblaciones y si su respuesta humanitaria no pone como eje fundamental la voz de quienes más conocen el conflicto y la violencia en el país: sus víctimas. La responsabilidad de todos nosotros es escucharlas.

Con 50 años de experiencia en la primera línea del conflicto armado en Colombia, seguimos comprometidos a encontrar soluciones pragmáticas a los complejos dilemas humanitarios, poniendo de relieve que las guerras sin límites son guerras sin fin.

“ Todos los actores armados deben ser inequívocamente responsables de sus actos. ”

Christoph Harnisch
Jefe de la Delegación del CICR en Colombia



Laura Aguilera / CICR

Vivir sin miedo, una deuda pendiente para Colombia

El recrudecimiento de las acciones armadas indica que las promesas de paz aún no se han materializado en las regiones más vulnerables, donde no ha habido una consolidación integral de la presencia del Estado y donde la llegada de migrantes implica nuevos desafíos.



987

VIOLACIONES AL DIH y otras normas humanitarias fueron documentadas por nuestros equipos en 2019.

La paz es todavía esquivada en muchos territorios de Colombia. En 2019, hubo 352 víctimas de artefactos explosivos y minas antipersonal, más de 25.300 personas desplazadas masivamente y 218 agresiones a la Misión Médica. Sin embargo, estos fueron solo algunos de los tristes indicadores del deterioro de las condiciones humanitarias en varias zonas del país.

Es preocupante que más de 27.600 habitantes hayan estado confinados debido a las acciones de grupos armados y a la presencia de explosivos. El 83% de estas personas vive en Chocó, un departamento sumido en condiciones de pobreza apremiantes e históricas necesidades básicas insatisfechas. Este fenómeno deja a comunidades enteras en medio de enfrentamientos, desabastecidas y con limitado acceso a sus cultivos y centros de salud.

Otros departamentos en los cuales observamos una situación apremiante son Nariño, Antioquia (especialmente en Bajo Cauca), Arauca, Norte de Santander, Cauca, Caquetá, Meta y Córdoba. Aunque es evidente que el contexto mejoró de manera importante en muchas partes del país, en otras, las carencias de la

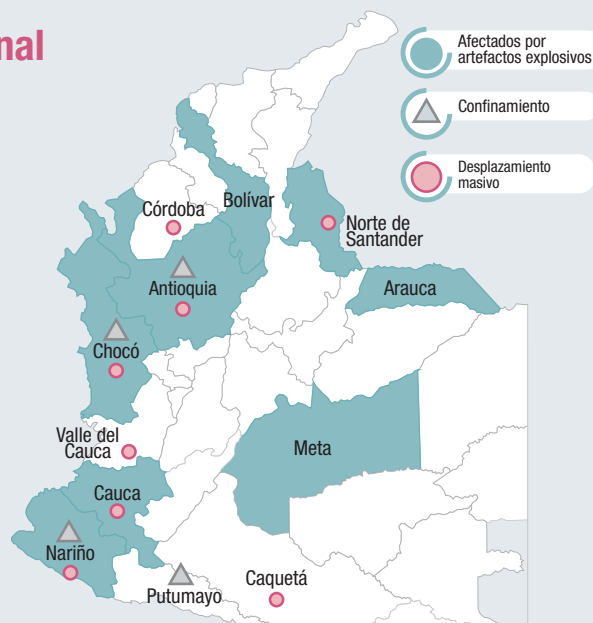
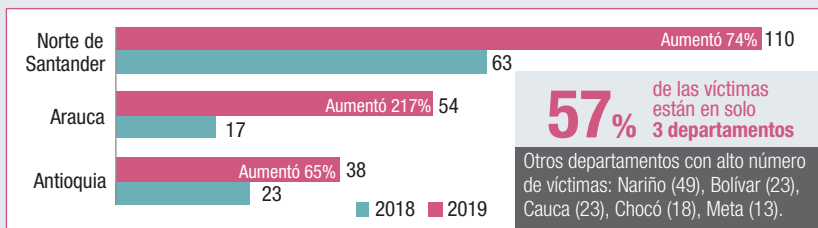
respuesta institucional contribuyeron al sufrimiento ya causado por la escalada en la intensidad del conflicto y la violencia armada.

Prueba de ello es que, a lo largo de 2019, nuestros equipos en el terreno documentaron 987 violaciones al derecho internacional humanitario (DIH) y otras normas humanitarias. El 77% de estos casos fueron amenazas, homicidios, actos de violencia sexual y reclutamiento de menores, entre otros hechos de suma gravedad. Sin embargo, se trata de una mirada parcial de la situación, resultado de los casos que conocemos de primera mano en las 13 oficinas que tenemos en el país. Este panorama desalentador muestra que todos los actores armados en Colombia aún irrespetan las reglas mínimas de la guerra y dejan a la población civil frente a las peores consecuencias de sus acciones.

Las cifras contenidas en este documento son útiles para comprender la dimensión de los efectos del conflicto y la violencia, pero no contamos con números que resuman todos los efectos que aún quedan por estimar, como el miedo, las condiciones de salud mental, la desesperanza, la incertidumbre, la deserción escolar o la estigmatización.



Víctimas de artefactos explosivos y minas antipersonal



Fuente: Comité Internacional de la Cruz Roja

Complejo panorama de abusos

Nuevas dinámicas de la violencia, sumadas a viejos comportamientos de los actores armados en Colombia, dibujan un complejo mapa de grupos armados más desestructurados que dificultan tanto el nivel de análisis que podemos hacer de la situación, como nuestra capacidad de dar la respuesta humanitaria que la población necesita.

Los abusos de la guerra no han menguado y tienen una configuración distinta en cada región del país. Esto significa que acciones como identificar las estructuras de los actores armados, establecer un diálogo para recordarles su obligación de cumplir las normas humanitarias y explicarles la importancia de permitirnos llegar a las víctimas todavía son nuestros grandes retos como trabajadores humanitarios, que también enfrentan otras organizaciones e instituciones estatales.

En 2019, registramos tendencias sobre dinámicas que persisten. Muchas de las víctimas utilizadas por miembros de grupos armados para sus actividades fueron luego violentadas sexualmente. En ocasiones, como represalia, otros grupos las desaparecieron o asesinaron. Las amenazas suelen extenderse a sus familias, las cuales debieron desplazarse y permanecer en silencio. El miedo, pero también la triste normalización de muchas de estas prácticas, dificultan la capacidad de conocer más casos y la posibilidad de tomar medidas preventivas para proteger a posibles víctimas.

Los abusos de la guerra no han menguado y tienen una configuración distinta en cada región del país.



Fernando Forero / OICR

Asimismo, el subregistro todavía es evidente en problemáticas como la desaparición, cuya dimensión incluye a más de 83.000 víctimas* y no muestra señales de detenerse. Durante 2019, registramos 93 nuevas desapariciones en Colombia.

Aunque obtuvimos información sobre 913 de las 2.158 personas que estamos buscando, solo se resolvieron 116 casos (5% del total). Lo anterior evidencia que encontrar a las personas que faltan es una tarea titánica que tomará muchos años y a la que la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas dedica todos sus esfuerzos, en conjunto con otras instituciones.

Las familias deben contar con mejores condiciones de seguridad para poder reportar sus casos. Y a esto debe sumarse el reconocimiento pleno por parte todos los actores armados sobre su obligación de brindar información para la búsqueda exitosa de los desaparecidos en sus zonas de influencia. Si no hay voluntad para cerrar la espiral de dolor que sufren demasiados colombianos, las respuestas, tan necesarias en estos momentos de incertidumbre, quedarán solo en el papel.

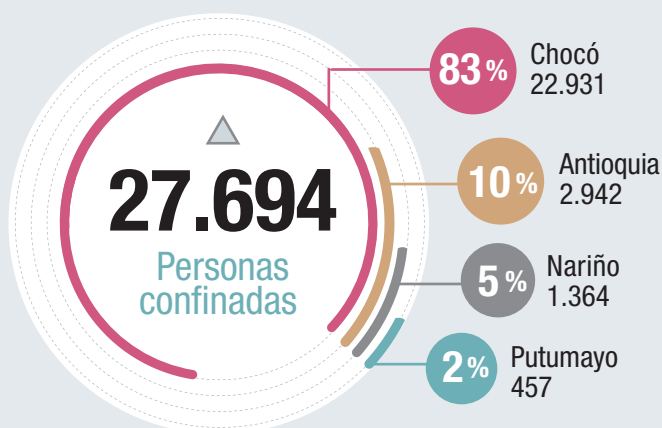
*Dato del Centro Nacional de Memoria Histórica
** Cifras de Migración Colombia
*** Según el Ministerio de Relaciones Exteriores

Migrar en zonas de conflicto

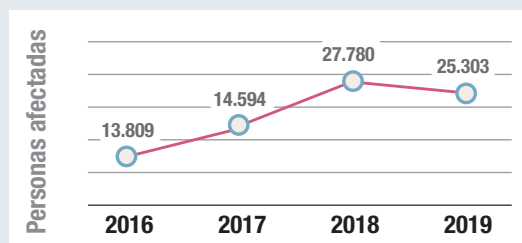
A este panorama se debe sumar la especial vulnerabilidad de más de 1,6 millones de migrantes**, incluyendo refugiados, cuando transitan o se establecen en zonas colombianas afectadas por el conflicto y la violencia armada. Además de los abusos y riesgos a los que están expuestos, se debe considerar, en muchos casos, el temor de buscar ayuda, la xenofobia y el escaso conocimiento de sus derechos.

Urge una respuesta integral a las necesidades de las comunidades que históricamente han sufrido los estragos de más de medio siglo de conflicto y que hoy acogen a la población migrante, así como a cerca de 500.000 colombianos*** que han retornado al país.

El confinamiento en 2019

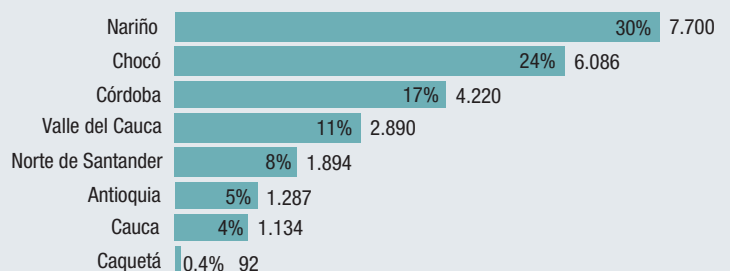


Desplazamientos masivos*



25.303
Personas afectadas

*Desplazamientos de 10 o más familias.





Daniel Valencia / CICR

Evacuación de una persona herida en zona rural del Chocó por parte del CICR y personal de salud de la zona.

Situación carcelaria, en alarmante detrimento

Cada año las condiciones de los detenidos empeoran en las cárceles colombianas. La inestabilidad de las políticas públicas en materia penitenciaria y carcelaria, así como el afán de solucionar los problemas más coyunturales, en lugar de los problemas estructurales, dificulta las respuestas a largo plazo.

Si bien valoramos los esfuerzos de las instituciones estatales, los problemas de la situación carcelaria en Colombia van mucho más allá del hacinamiento y de las difíciles condiciones que genera para las personas privadas de la libertad.

Las amenazas a la salud

Debemos recordar que la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC-EP cumple cuatro años en 2020. Los avances que ese histórico hecho representó para el país también suponen retos adicionales para las partes y para la sociedad civil en general.

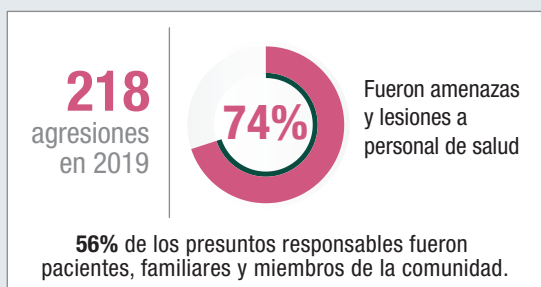
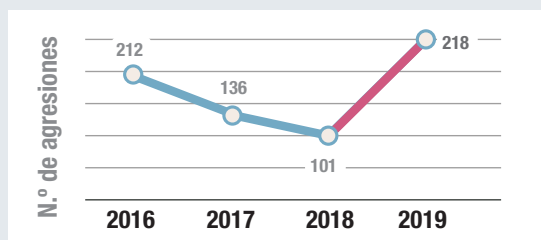
Es innegable que la respuesta institucional a las víctimas se ha robustecido, a la vez que las comunidades han mejorado su capacidad de autoprotección y organización para la defensa de sus derechos. Sin embargo, este potencial se pone en riesgo cada vez que se ataca la capacidad de algo tan esencial como salvar vidas. Ese ha sido el caso de las 218 agresiones que se registraron en 2019 en contra del personal sanitario y de las estructuras de salud. En algunos casos, las agresiones ocurrieron en contextos que implicarían graves violaciones al DIH.

Buena parte de las zonas del país que requieren mayor atención aún no han visto el cumplimiento de los compromisos firmados. Allí es frágil la presencia estatal para garantizar la salud, la educación y los servicios básicos para vivir en condiciones dignas. A su vez, observamos con preocupación que la precariedad de la situación humanitaria en estas regiones favorece la agudización de la violencia y fortalece las

economías ilícitas que la sostienen, como el narcotráfico y la minería ilegal.

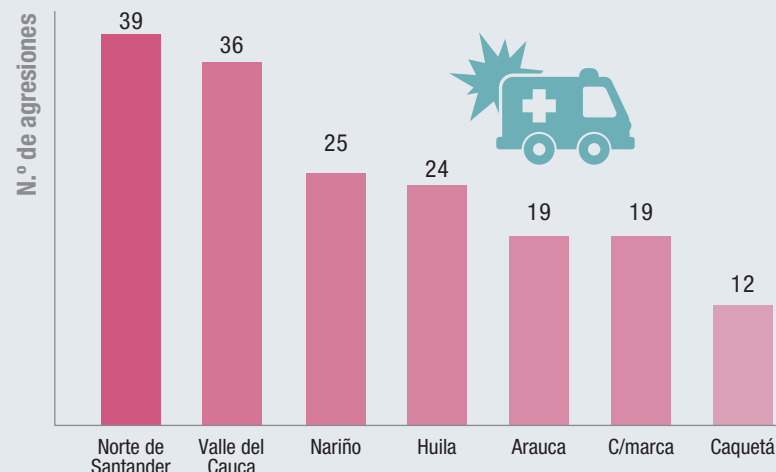
El hecho de buscar o brindar atención médica se ha convertido en un acto de valor en departamentos como Norte de Santander y Valle del Cauca. Por un lado, los pacientes se encuentran con estructuras precarias o casi inexistentes justo en las zonas donde son más apremiantes los efectos del conflicto y la violencia armada. Por otro lado, las amenazas y las peligrosas situaciones de inseguridad impiden que el personal de salud continúe con su trabajo. En consecuencia, es imposible calcular la cantidad de enfermedades prevenibles, complicaciones médicas y muertes que se hubieran podido evitar cada vez que un trabajador de la salud fue obligado a huir o cada vez que un puesto de atención cerró por falta de recursos.

Agresiones contra la Misión Médica



Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social

Departamentos que concentraron el 80% de las agresiones en 2019



Nuestros llamados a la acción

A los actores armados

- Instamos a la Fuerza Pública y a los grupos armados a cumplir con su responsabilidad de conocer, respetar y aplicar el DIH y otras normas humanitarias. En ninguna circunstancia los civiles deben seguir sufriendo las consecuencias de las acciones armadas. La compleja situación en distintas regiones del país es nuestro principal argumento para recordarles que los límites de la guerra no son opcionales.
- Recordamos que todos los actores armados deben brindar información sobre la suerte de los desaparecidos. Cumplir con este propósito ayudará a darles respuestas a decenas de miles de familias que aún no saben lo que ocurrió con sus seres queridos.



Daniel Valencia / CICR

A las autoridades

- Es importante que las nuevas autoridades locales y regionales orienten sus esfuerzos a prestar una atención digna, oportuna e integral a las comunidades afectadas por el conflicto y la violencia armada en zonas urbanas y rurales.
- Insistimos en que el Estado debe reforzar su capacidad para brindar una atención integral, que incluya acompañamiento psicosocial y apoyo económico, a todas las víctimas. El trato digno, eficiente y sin revictimización debe adaptarse a las necesidades de los sobrevivientes de violencia sexual, reclutamiento, artefactos explosivos, amenazas y desaparición, entre otros.
- Reconocemos los esfuerzos hechos por el Estado para responder a las necesidades de los migrantes. Sin embargo, es importante que se facilite la implementación del marco normativo a nivel regional y local.
- Exhortamos a la continuidad del apoyo a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, que debe contar con los recursos necesarios y con la colaboración de todas las agencias del Estado para el cumplimiento de su misión.
- La adecuada gestión de las morgues, los cementerios y otros lugares de entierro es clave para la búsqueda de desaparecidos y para evitar la pérdida de cuerpos. Instamos a las instituciones competentes a reconocer su responsabilidad en esta labor.
- Recordamos a las autoridades penitenciarias la importancia de unificar la responsabilidad de la salud de los detenidos a un único ente rector con la autonomía suficiente para asumir la toma de decisiones sobre la condición física y mental de los internos.



Kevin Quiroz / CICR

A la sociedad colombiana

- Dado que la mayoría de las agresiones contra la Misión Médica en 2019 fueron protagonizadas por miembros de la población civil, extendemos un llamado para que todos protejan y respeten la labor de los trabajadores de la salud. Esto es igual de relevante para los actores armados.
- Es fundamental el compromiso del sector privado para facilitar un empleo justo y digno a víctimas del conflicto armado y migrantes.



Rebeca Lucía Gallardo / CICR

A la comunidad internacional

- La respuesta a los retos de la migración es un deber inaplazable. La comunidad internacional debe aumentar su contribución financiera a los programas humanitarios destinados a dar respuesta a las poblaciones de migrantes (incluidos refugiados), así como a los colombianos retornados y a las comunidades receptoras.



Laura Aguilera / CICR



11.900

Personas mejoraron su seguridad económica tras recibir alimentos, así como apoyo para actividades productivas y de generación de ingresos. De ellas, 4.400 estaban en zona rurales.



Daniela Valencia / CICR



Laura Aguilera / CICR

“Mi hija no puede escuchar un ruido porque se pone a llorar. El miedo es tremendo por los enfrentamientos, pero ¿para dónde vamos a correr?”

—Hermes, habitante de Hacarí, Norte de Santander.

139.000

Recibieron medios de subsistencia y apoyo para mejorar sus ingresos.

34.000

Contaron con atención médica y psicosocial.

260.000

Mejoraron el acceso al agua y a la infraestructura.



Laura Aguilera / CICR



452.000

Migrantes y habitantes de comunidades receptoras cuentan con condiciones de vida más dignas.



1.270

Heridos, enfermos y personas con discapacidad accedieron a servicios de salud y rehabilitación física.



49.200

Personas afectadas por el conflicto y la violencia armada tienen mejores condiciones sanitarias y de infraestructura, así como acceso al agua.

“Pensamos que hay paz, pero lo que está sucediendo es más preocupante para nosotros, porque nos toca salir al campo para ganarnos el sustento.”

—Luber, víctima en Caquetá.



Jerónimo Holguín



29.400

Habitantes de zonas afectadas por artefactos explosivos aprendieron a mitigar el riesgo de accidentes.



100

Víctimas recibieron atención en salud y orientación.



100

Sobrevivientes hoy se movilizan mejor gracias a sillas de ruedas, prótesis y otros elementos de rehabilitación física.

Victimas del conflicto

Migrantes en Colombia

Ante los artefactos explosivos

Buscar a los desaparecidos

En 2019, nuestro trabajo benefició a

557.000* personas

Esto fue posible gracias al esfuerzo común con la Cruz Roja Colombiana y otros socios.

Sobrevivientes de violencia sexual



179 Víctimas recibieron atención psicológica y psicosocial.



770 Víctimas y sus familias fortalecieron su capacidad para generar ingresos y vivir de manera más digna.



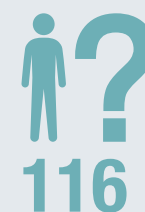
Donamos medicamentos e insumos médicos

para 14 hospitales que atendieron a más de 30.000 colombianos y migrantes.



Cuerpos de personas

desaparecidas fueron trasladados para su entrega a las autoridades o a las familias. Además, 170 familiares recibieron cuidados en salud mental.



Familiares de desaparecidos

obtuvieron información sobre el paradero de sus seres queridos gracias a nuestro apoyo: 75 fueron localizados con vida.



1.500

Familiares tienen una mejor subsistencia tras recibir orientación, dinero, formación y apoyo para obtener empleo o fortalecer sus negocios.



Laura Aguilera / CICR

“Se siente como si te arrancaran el corazón. No se tiene paz. Yo deseo abrir la puerta y ver a mis hijos ahí.”

—Omaira, madre de dos desaparecidos en Arauca.



261.000

Servicios de llamadas, wifi y carga de baterías ayudaron a que los migrantes contactaran a sus seres queridos.



230

Personas con discapacidad en las cárceles hoy cuentan con facilidades para superar las barreras de movilidad, sillas de ruedas, prótesis y otros servicios de rehabilitación física.



2.500

Miembros de la Fuerza Pública y autoridades penitenciarias participaron en formaciones sobre estándares internacionales de uso de la fuerza, DIH y otras normas humanitarias.

*Una persona pudo haber recibido más de un servicio.



Stéphanie Solère / CICR

Comunidad indígena del Chocó participa en una actividad para mejorar sus condiciones sanitarias.

Más razones para estar a tu lado

En 2019, apoyamos a más de

557.000 personas*

en zonas de conflicto y violencia, en situación migratoria y en las cárceles de Colombia. Trabajamos junto con la Cruz Roja Colombiana y otros socios.

*Una persona pudo haber recibido más de un servicio.

\$129.600 millones de pesos
colombianos fue nuestro presupuesto en 2019

374
colombianos

Somos **445**
trabajadores
humanitarios en Colombia

71
extranjeros de 19
países diferentes



CICR

Somos el Comité Internacional de la Cruz Roja

Ayudamos a personas de todo el mundo afectadas por conflictos armados y otras situaciones de violencia, haciendo lo posible por proteger su dignidad y aliviar su sufrimiento, a menudo junto a nuestros asociados de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.

-  CICRColombia
-  @CICR_co
-  cicr_americas
-  www.cicr.org/co